

Naveillan oficia a Contraloría por uso de recursos del Royalty Minero en municipios del Distrito 22

La diputada Gloria Naveillan solicitó a Contraloría fiscalizar el uso que los municipios del Distrito 22 están dando a los recursos del Royalty Minero, tras conocerse antecedentes sobre la Municipalidad de Lumaco que abrieron dudas respecto del destino efectivo de esos fondos.

La diputada Gloria Naveillan ofició a la Contraloría General de la República para que revise el uso de los recursos que los municipios del Distrito 22 están recibiendo a través del Royalty Minero, en una acción que busca resguardar que esos dineros sean utilizados correctamente y de acuerdo con el objetivo para el cual fueron entregados.

La decisión se adoptó luego de que una investigación del medio local Novena Digital revelara antecedentes sobre el uso de esos recursos en la Municipalidad de Lumaco. El reportaje revisó el informe oficial del Royalty Minero 2025 y detectó gastos asociados a remuneraciones municipales y partidas vinculadas a mejoramiento de cementerios, además de establecer que la comuna recibió más de \$450 millones por con-

cepto de Fondo de Equidad Territorial.

Según esa investigación, el propio alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, reconoció que estos recursos permitieron liberar presupuesto municipal que luego fue destinado al pago de deuda previsional en educación. En sus declaraciones, sostuvo que el mecanismo se utilizó dentro del marco normativo vigente y en medio de presiones financieras estructurales de la comuna.

Frente a estos antecedentes, Gloria Naveillan resolvió ampliar la preocupación más allá de un caso puntual y pedir que Contraloría fiscalice el uso de estos fondos en el conjunto de los municipios del distrito. A juicio de la parlamentaria, cuando se trata de recursos públicos de esta magnitud, resulta indispensable que exista claridad to-

tal sobre su destino y sobre el impacto real que están teniendo en las comunas.

La diputada sostuvo que una de sus tareas permanentes es fiscalizar el buen uso de los recursos públicos y que, por lo mismo, no puede ser indiferente ante señales que siembran dudas sobre la utilización de fondos que debieran traducirse en beneficios concretos para la comunidad. En esa línea, advirtió que el Royalty Minero fue presentado como una herramienta para fortalecer a los territorios, por lo que corresponde asegurar que esos recursos no terminen desviándose de su finalidad.

En el caso de Lumaco, la investigación también consignó que parte de los cuestionamientos se originaron por partidas vinculadas a cementerios municipales y por la constatación en terreno



de mejoras que no parecían guardar proporción con los montos informados. Además, un concejal de la comuna planteó observaciones sobre la manera en que estos recursos fueron informados y distribuidos dentro del concejo municipal.

Para Gloria Naveillan, este tipo de antecedentes obliga a actuar con rapidez y con rigor. Por eso, el oficio enviado a Contraloría busca que se determine si los fondos del Royalty Minero están siendo utilizados conforme a derecho, si existe un uso indirecto que desvirtúe su propósi-

to y si corresponde adoptar medidas correctivas o eventuales responsabilidades.

La parlamentaria recalcó que esta acción también refleja su decisión de mantenerse atenta al funcionamiento de los municipios del Distrito 22. A su juicio, fiscalizar no es una tarea secundaria, sino una obligación permanente, especialmente cuando se trata de recursos que pertenecen a todos los vecinos y que deben ser administrados con transparencia, responsabilidad y apego estricto a la finalidad para la cual fueron entregados.